

Benito Juárez

***Documentos,
Discursos y Correspondencia***

Tomo 12, capítulo CCXXXI

Selección y notas de
Jorge L. Tamayo

Edición digital coordinada por
Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva

Tomo revisado y anotado por
María del Carmen Berdejo Bravo

Versión electrónica para su consulta
Aurelio López López



Año 2006

Tomo 12, capítulo CCXXXI

**Anotado y revisado por
María del Carmen Berdejo Bravo
(UAM Azcapotzalco)**

Capítulo CCXXXI

**Se aplaza el juicio de González Ortega;
A Patoni se le ofrece la libertad**

Septiembre de 1867

CCXXXI

SE APLAZA EL JUICIO DE GONZÁLEZ ORTEGA; A PATONI SE LE OFRECE LA LIBERTAD

Septiembre de 1867

Seguramente recordarán los lectores que, el 8 de enero de 1867, el general González Ortega, acompañado del general José María Patoni, se presentó ante el gobernador del estado de Zacatecas, general Miguel Auza, pretendiendo que lo reconociera como presidente sustituto de la República, a lo que se negó el general Auza.¹

Fueron aprehendidos ambos generales y enviados inmediatamente rumbo a la ciudad de Durango; a orillas de la misma hicieron escala y reanudaron un nuevo recorrido hacia San Luis Potosí, en donde sólo permanecieron unas cuantas horas y finalmente se les llevó a Saltillo. Como se ha señalado en capítulos anteriores, a los dos meses, o sea a fines de marzo, el Presidente Juárez ordenó fueran trasladados los prisioneros a Monterrey, quedando bajo la vigilancia directa del gobernador Manuel Z. Gómez.²

Los acontecimientos de los últimos meses de lucha contra el imperio, la caída de Querétaro y de México desviaron la atención pública y prácticamente había quedado en olvido la situación de los generales González Ortega y Patoni. Tampoco en las semanas siguientes, al regreso del gobierno a la Ciudad de México, se hizo referencia alguna en la prensa y fue hasta el 16 de agosto que el ministro de Guerra, general Ignacio Mejía, dirigió una comunicación al gobernador en funciones de comandante militar del estado de Nuevo León, en la que después de hacer una breve historia de los antecedentes de la actitud que había

¹ Véase tomo 11.

² Véase tomo 11.

asumido el general González Ortega, negando legalidad a los decretos del 8 de noviembre de 1865, hace saber que el Presidente de la República ha resuelto que continúe en prisión el general González Ortega, hasta que se instale el IV Congreso y tome posesión el nuevo presidente que se elija, salvo que el general González Ortega desee que se le sujete a juicio desde luego.

El 4 de septiembre, el señor Manuel Z. Gómez transmitió en forma oficial la decisión del ministro de Guerra, pero fue hasta el 10 siguiente en que el general González Ortega contestó en una carta sumamente larga; no obstante ello, la reproducimos íntegra, porque en ninguna obra histórica de la época ha sido transcrita en su totalidad, ni aun en el libro que publicó su nieto, con el propósito de defender su memoria. Además, es interesante porque el general González Ortega da la versión de los sucesos con mucho detalle y, finalmente, ofrece la argumentación que considera justifica su actitud.

Hemos ya reproducido diversos documentos y estudios, criticando la conducta del general González Ortega y nos parece que es conveniente conocer directamente su punto de vista.

Podrá apreciarse, después de la lectura de este amplio documento, que la argumentación de González Ortega es superficial y de carácter personalista, exhibiendo inquina y predisposición contra Juárez.

El licenciado José González Ortega en su libro afirma que el general González Ortega logró, con muchos esfuerzos, que salieran "subrepticamente" de su prisión cuatro copias de la mencionada carta con el objeto de divulgarla.³ El periódico *El Siglo Diez y Nueve* publicó, si bien con cierta demora, hasta el 15 de noviembre, la carta del general González Ortega fechada el 10 de septiembre en Monterrey, acompañando copia de la mencionada respuesta y pidiendo se publicara.

El Siglo Diez y Nueve consideró que era de elemental justicia darle oportunidad al general González Ortega para que se defendiera públicamente de los cargos que se le habían hecho, razón por la que reproduce íntegra la carta, advirtiendo a sus lectores, en nota preliminar,

³ José González Ortega, *El golpe de Estado de Juárez*, México, 1941, p. 383.

que no considera válidas ni de peso las razones que presenta el general González Ortega, pretendiendo justificar su actitud. No hizo comentario alguno sobre la forma en que le llegó el documento y tampoco le dio el carácter sensacional de que le hubiera llegado en forma clandestina.⁴

Por lo que hace al general Patoni, la actitud del gobierno fue diferente, y el 6 de septiembre el mismo ministro de Guerra dice al gobernador y comandante militar de Nuevo León, que el Presidente de la República ha resuelto se ponga "en libertad el ex general José María Patoni", indicándole que, bajo su palabra de honor, se presente a la Ciudad de México.

Manuel Z. Gómez se lo comunica al general Patoni el 21 de septiembre, y dos días después contesta el prisionero, informándole que no acepta la libertad en esas condiciones, porque sería una inconsecuencia y, en cierto modo, confesarse culpable de algún delito. En actitud arrogante, pero cortés, dice que no responde a la comunicación oficial que se le envía con carácter oficial, sino que lo hace en forma epistolar, precisamente por las mismas razones.

El gobernador envía el texto de las respuestas de los generales González Ortega y Patoni, al ministerio de Guerra, hasta el 24 de septiembre, y en carta particular a Juárez, que se reproduce en el capítulo, comenta, en forma un tanto cuanto irónica, que estuvo tentado de publicarlas en la prensa local, pero que se abstuvo porque temió que el gobierno federal se molestara, si se daban a la publicidad sin un comentario enérgico por parte del gobierno local; pero que a la vez consideró que era preferible que la respuesta la dieran las autoridades federales.

No obstante lo apasionado y parcial de la opinión, creemos útil, para completar este capítulo, incluir los párrafos que el licenciado José González Ortega dedica en su libro para comentar los documentos anteriores y los acontecimientos conexos:

⁴ *El Siglo Diez y Nueve*, 15 de noviembre de 1867, p. 1 y 2.

Durante los primeros meses en que don Benito estuvo moviendo sus hilos para apoderarse otra vez de la Presidencia, mantuvo preso al Gral. Ortega sin darle explicación ninguna; pero tan pronto como consideró que los planes para la fingida elección estaban cristalizando, quiso producir en el país una impresión de justicia y al efecto dirigió a González Ortega, por conducto de don Manuel Z. Gómez, Gobernador y Comandante Militar de Nuevo León..."⁵ la carta que figura en este capítulo.

Aparte de confesar que, violando el artículo 105 de la Constitución de 57, se había arrogado el Sr. Juárez la facultad de constituirse en jurado de acusación contra González Ortega, no obstante ser ésa una prerrogativa inalienable del Congreso general; aparte de la confesión de que también había violado don Benito el artículo 104, invadiendo las facultades del Congreso — que era el único que podía declarar si había lugar a procederse contra el general (González) Ortega por el delito común que se le había inventado—, y aparte, también, de la nimiedad del pretexto de no haberle formalizado juicio para no distraer de las ocupaciones de la guerra a los jueces respectivos, revela este documento en toda su inmoral y taimada hipocresía el procedimiento usado por el gobierno, de hacer efectiva desde luego la pena contra el inculpado, para juzgarlo después, cuando el mal no tenía remedio. Es decir, aquello de «Fusílenlo, y después lo juzgaremos».

El juego empleado por don Benito era bien claro. Si el general (González) Ortega «deseaba que se le juzgase», el señor Juárez tenía el poder suficiente para hacerlo condenar; y si deseaba lo contrario, esa negativa quitaría al Gral. (González) Ortega todo motivo de queja para lo futuro, fuera cual fuera el tiempo que se prolongase su prisión. Pero lo más importante era que en uno u otro caso, el solo hecho de que el general (González) Ortega

⁵ González Ortega, *El Golpe de Estado*, p. 378.

contestase la comunicación que se le daba a conocer, implicaba el reconocimiento de la legitimidad del gobierno de don Benito.

DOCUMENTOS

Septiembre de 1867

SE APLAZA EL JUICIO CONTRA
EL GENERAL GONZÁLEZ ORTEGA

Ciudadano comandante militar del estado de Nuevo León
Monterrey

En el decreto relativo de 8 de noviembre de 1865, se declaró que era responsable el señor don Jesús González Ortega, porque estaba permaneciendo voluntariamente en el extranjero, durante la guerra, sin licencia ni conocimiento del gobierno.

Aparecían contra él dos responsabilidades. Una por falta oficial en el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia, en virtud de haber hecho abandono voluntario de ese cargo, en las más graves circunstancias de la guerra y, la otra, por delito común en virtud de que, teniendo el carácter de general, había hecho en las mismas circunstancias abandono voluntario de la causa de la República y de las banderas del ejército.

Según el artículo 103 de la Constitución Federal, el presidente de la Corte es responsable, durante su encargo, tanto por los delitos, faltas u omisiones oficiales en el mismo cargo, como por los delitos comunes.

Respecto de los delitos oficiales, la regla establecida en el artículo 105 es que el Congreso conocerá como jurado de acusación para declarar si el acusado es o no culpable y que, en el primer caso, la Suprema Corte de Justicia se erigirá en jurado de sentencia para proceder a la aplicación de la pena. Respecto de los delitos comunes, establece el artículo 104 que el Congreso se limitará a declarar si ha lugar o no a proceder contra el acusado y que, en el primer caso, quedará separado de su encargo y sujeto a los tribunales comunes.

Para sólo declarar que había lugar a proceder contra el señor González Ortega, daba sobrado motivo legal la absoluta notoriedad de su falta; pero, en cuanto a la declaración de que fuera culpable, se consideró

lo más regular esperar a que se presentase en el territorio de la República para poder oír en juicio lo que quisiera alegar en su defensa. Por esta razón, atendiendo el gobierno a las reglas de los citados artículos constitucionales y usando de las amplias facultades que le delegó el Congreso, declaró que había lugar a proceder contra el señor González Ortega, por la responsabilidad del delito común y que, en lo relativo a la del delito oficial, cuando se presentase en el territorio de la República, se dispondría lo conveniente para que se procediere al juicio en que debiera calificarse su culpabilidad.

En enero de este año se presentó en la ciudad de Zacatecas, donde fue aprehendido y puesto a disposición del gobierno, quien desde entonces hubiera podido someterlo al juez competente por la responsabilidad del delito común y resolver también lo que conviniera acerca del juicio por el delito oficial. Sin embargo, creyó el gobierno que debía aplazar su resolución porque era superior, a todo, el interés de atender a las circunstancias que guardaba entonces la guerra sin distraer a los que la sostenían con cualquiera otro objeto y sin dar motivo para que se preocupasen los ánimos con cualquiera otra consideración.

Aunque han variado las circunstancias, parece preferible reservar todavía el caso por algún tiempo. Debiendo verificarse próximamente las elecciones, el gobierno prefiere reservar al Congreso que conozca de la responsabilidad por el delito oficial. En cuanto al delito común, hecha ya la declaración de que ha lugar a proceder, corresponde sólo al gobierno hacer la consignación al juez competente; pero cree preferible reservar también esto para que lo resuelva, después de las elecciones, quien haya merecido la confianza y los votos del pueblo para primer magistrado de la República. Cuando el gobierno aplazó el caso en enero de este año por las circunstancias de la guerra, estimó esta consideración superior a cualquiera otra, aun la de la voluntad del señor González Ortega; pero hoy, que prefiere reservar todavía el caso por los motivos indicados, desea evitar dicho señor presentase esta dilación como un motivo de queja si él quisiera antes ser juzgado.

En tal virtud, ha acordado el ciudadano presidente que se reserve este asunto para cuando después de las elecciones se instale el Congreso y tome posesión el Presidente de la República, excepto que el señor González Ortega quiera que se le sujete a juicio desde luego.

Dispone el ciudadano presidente que se sirva usted mandar hacer saber esta resolución a dicho señor, dando cuenta de su respuesta al gobierno.

Independencia y Libertad. México, agosto 16 de 1867.

(Ignacio) Mejía

RESPUESTA DEL GENERAL
GONZÁLEZ ORTEGA

Monterrey, septiembre 10 de 1867

Señor licenciado don Manuel Z. Gómez

Muy señor mío y de mi respeto:

Por razones que expondré en el cuerpo y final de esta carta, me dirijo a usted por medio de ella y no en una forma oficial.

Hace un poco más de ocho meses que me presenté en la ciudad de Zacatecas, con el carácter de presidente interino constitucional de la República, con cuyo carácter me habían revestido el voto de los pueblos y un precepto expreso de nuestra Ley Fundamental. Manifesté al señor general don Miguel Auza, comandante militar de aquel estado y jefe de las fuerzas que guarnecían la ciudad, que no llevaba el objeto de trastornar el orden público de una manera imprudente, ya atrayéndome algunas fuerzas adictas al orden constitucional por sólo la causa que oficialmente representaba, o ya echando mano de cualquiera otro medio revolucionario, porque quería evitar, hasta donde humanamente me fuera posible, el derramamiento de sangre entre fuerzas liberales. Le dije también, que el objeto que me llevaba a aquella parte de la República, era el de pedir al mismo señor general Auza en nombre de la ley, única base del progreso y de la paz de las repúblicas y única bandera que Zacatecas había tenido siempre, todo el apoyo físico y moral del estado, tanto para salvar la independencia nacional, como la Constitución de 1857, barrenada ostensiblemente en una de sus partes más esenciales, que es su inviolabilidad; pero destruida en el fondo al crearse una autoridad

revolucionaria por el golpe de Estado de 8 de noviembre de 1865, tan hábil como simuladamente fraguado y ejecutado en El Paso del Norte.

Tuve sobre todo esto una larga conferencia con el citado general y aunque este señor conoció la legitimidad de los títulos que yo llevaba, que eran con los que me había revestido la nación, so pretexto de que no apareciera la guerra civil, o temeroso en realidad de ella, como si la salvación de la ley fuera la guerra civil, me negó todo apoyo y acordó mi prisión pasando sobre los fueros de nuestro pacto político, en cumplimiento de órdenes superiores, según dijo. El golpe de Estado del Paso del Norte quedó allí consumado, pero no vencedor, ni lo está todavía.

Me acompañaba el señor general don José María Patoni, gobernador constitucional del estado de Durango. El general Auza quedaba conforme con sólo mi prisión, según lo manifestó en comedidos y caballerosos términos, después de haberme invitado al reconocimiento del señor licenciado Juárez, al que me negué de un modo absoluto y concluyente, por no tener facultades para ello e impedírmelo intereses que eran de los pueblos y no míos. El general Patoni dio las gracias al general Auza por medio de una cortés inclinación y dijo en breves palabras: que como soldado, como gobernador y como liberal, no había recibido otra bandera del pueblo que la Constitución de 1857 y que estando ésta representada en mi persona y autoridad, seguía mi suerte. La siguió y la ha seguido hasta hoy y la seguirá hasta el fin. Cree que su deber es no abandonar ni por un momento el pendón que le dio su estado, y aun caer con él, caso que desaparezca.

Concluida la conferencia, el general Auza me hizo esta pregunta: ¿Se dirigen ustedes para su casa a fin de mandarlos aprehender en ella? Le contestamos afirmativamente y cumplimos nuestra oferta.

Cuando llegábamos a la casa de mi habitación, se aproximaron dos jefes hacia nosotros y poniendo en mis manos una comunicación, nos intimaron que nos entregáramos como prisioneros en nombre del Supremo Gobierno. Les contesté: que como soldado, como político y como autoridad, había combatido siempre contra todo gobierno intruso y usurpador y que siendo yo entonces por voluntad de la ley la autoridad

suprema, no reconocía a ningún otro gobierno. Los jefes me replicaron comedidamente, que respetaban mi opinión, pero que ellos servían a un gobierno y que tenían la fuerza necesaria para apoyar sus disposiciones, mostrándome al efecto una fuerte escolta colocada a algunas varas de distancia, además de otras muchas fuerzas que se hallaban apostadas en todas las calles de la ciudad, para imponer al pueblo. Mi respuesta final fue decirles, que cedía a la violencia y a la fuerza, pero que no reconocía derecho alguno legítimo en el gobierno a quien servían.

Fui conducido a la casa de gobierno y colocado en una de las oficinas de aquel edificio. Pedí inmediatamente al oficial que me custodiaba tinta y papel para formular una protesta. Su respuesta fue decirme que los útiles de escritorio se habían mandado retirar para que yo no hiciera uso de ellos y además que tenía orden de no permitirme que escribiera cosa alguna.

En vista de esto y en presencia del mismo oficial y de algunos jefes que se hallaban en la oficina, encontrándose entre ellos el señor coronel don Pedro Barrios y el mayor de la plaza, dije: que protestaba, en nombre de la nación y como autoridad constitucional de la misma, contra el acto escandaloso que acababa de tener lugar y que de este modo dejaba a salvo, por mi parte, los intereses del pueblo y la majestad de la ley, simbolizada esta última en mi persona. Añadí, que deseaba que aquel acto, con el que se deshonoraban en la práctica los principios republicanos, no volviera a repetirse; y, por último, que en el hecho de no tener posibilidad de dejar consignada aquella protesta en un documento oficial, lo hacía verbal ante ellos, para que el pueblo pudiera hacerla valer, en defensa de sus derechos, cuando fuera oportuno.

Tres cuartos de hora después de mi captura se me sacaba de la ciudad, custodiado por una brigada de caballería, al mando del citado coronel don Pedro Barrios. (Once y media de la noche del 8 de enero de 1867.)

La vía que se tomó es la que conduce hacia la ciudad de Durango, sin tocar por supuesto las ciudades o poblaciones de alguna importancia del tránsito, o tocándolas por los suburbios en las horas silenciosas de la noche.

No se quiso que entrara a la ciudad de Durango. Del estado de este nombre, como he dicho y usted lo sabe, es gobernador constitucional el señor general don José María Patoni, mi compañero de prisión.

Antes de mi llegada a dicha ciudad, se hizo salir de ella una brigada de las tres armas, al mando del señor general don Francisco O. Arce y coronel don Z. Macías quienes, encargados de mi custodia, me hicieron retroceder hacia San Luis Potosí. En esta ciudad sólo permanecí unas cuantas horas, al fin de las cuales se me hizo salir precipitadamente para El Saltillo y de aquella población se me trasladó a ésta después de dos meses.

Ni antes ni ahora me ha ocurrido preguntar quiénes son las personas que se han constituido por mis jueces, a disposición de quién estoy y por quién, aun siquiera para reclamar las garantías individuales, que como miembro de una sociedad civilizada tengo derecho a exigir de ella. La arbitrariedad decretó mi prisión, haciendo para ello enmudecer el derecho; por esto me ha sido indiferente indagar el carácter de las personas que se encargan de mi custodia o que forman el poder, porque como no reconozco en ellas algún origen legal, sino el vicioso que da la arbitrariedad y la fuerza, elementos funestos que han impedido siempre la paz y el progreso de la República, me he resignado a correr la suerte que la misma arbitrariedad me depare; me he resignado, por la imposibilidad en que me hallo, a ver hecha jirones nuestra Ley Fundamental, a ver despedazados y puestos a los pies del poder la soberanía del pueblo, los derechos y garantías de los ciudadanos y todos los grandes principios que forman el bienestar y constituyen la vida política de los pueblos libres; me he resignado a todo, menos a faltar en lo más mínimo a los compromisos solemnes que me impusieron los pueblos, con la firme y segura convicción de que no muy tarde recobrará la República los derechos que le han sido arrebatados a la sombra de espléndidos triunfos por ella obtenidos.

¿Brillará para mí ese día? Absolutamente no lo espero y es muy probable que no venga. Tengo el delito de haber obtenido el sufragio nacional para presidente de la Suprema Corte de Justicia, o sea vicepresidente de la República; he cometido el crimen de que el pueblo,

en uso de sus derechos, haya consignado, en el código político que tiene para gobernarse, preceptos expresos y terminantes, por los que yo debía de ser el presidente interino de la República (artículos 79 y 82 de la Constitución) y, por último, he cometido la enorme falta de estar firme al lado de ese código y de gritarle al poder del Paso del Norte en cumplimiento de mi deber: "No rompas esa ley, porque pierdes a la República empujándola a la anarquía; esa ley es su bandera; su inviolabilidad es su salvación." Todos estos crímenes o títulos se oponen a otros intereses que se han creado y en cuyas manos me encuentro. Esos intereses han recurrido a todos los medios posibles, hasta al de la calumnia, para hacerme desaparecer políticamente. Ellos seguirán su marcha rápida y precipitada y llegarán a su término por las vías que les vayan marcando las emergencias políticas.

¿Brillará ese día para la República y para mi patria? Ni un momento lo he dudado; porque si los intereses, las pasiones y las intrigas de los hombres son formidables y poderosas para aniquilar física y moralmente a un ciudadano; son débiles, nulas e impotentes para destruir la verdad en que descansan los principios conquistados por los pueblos. Esa verdad, sobre los pulverizados y quiméricos triunfos de los intereses, de las pasiones y de las intrigas asomará no muy tarde su faz victoriosa.

Por lo antes expuesto y por razones que sólo el poder podrá explicar, no he visto más autoridades cerca de mí, ni pretendido ver otras que los signos de la fuerza. Centinelas que me vigilan durante el día y la noche, bayonetas que me cercan aun en los actos más necesarios de la vida, todo para incomunicarme del resto de la sociedad y privarme de este modo, como en los tiempos nefandos de la Inquisición, de hacer uso de la prensa y de otros medios establecidos por la civilización y puestos en manos de la humanidad para su legítima defensa.

No he visto cerca de mí, sino de cuando en cuando, a tal o cual persona, con determinadas consignas y previos solemnes requisitos y formalidades.

No he visto en torno mío sino los enrejados de hierro que se han colocado ex profeso para encerrar entre ellos, como a una fiera sangrienta y carnívora, al Presidente constitucional de uno de los Supremos Poderes

de la confederación mexicana y esto cuando aún se rinde culto al nombre de la Constitución de 57, no pareciendo que ha querido hacerse con esto, ante el mundo y ante la historia, sino una burla sarcástica y cruel de los principios republicanos.

Por decoro del pueblo en que nací y por honor a mis creencias políticas, habría tachado con gusto las líneas precedentes, si más alto que ellas y de un modo más elocuente, no hablaran los hechos en una de las más demócratas y principales ciudades de la República. Además, mi censura indica que, en estos actos, que en esos hechos, no veo el dedo de la libertad, no veo la mano de la República, porque ellos ni son ni pueden ser la obra de la democracia.

También las habría tachado por el enlace que tienen con mi persona como particular, porque no he querido ocuparme de ella como simple ciudadano; pero mi persona representa la dignidad de la autoridad, la majestad de la ley, así como una bandera, por despreciable que sea el lienzo de que se compone, simboliza lo más grande y noble que tiene una nación.

Mientras, pues, represente aquellos intereses morales de los pueblos y éstos no me releven de su representación por sus legítimos órganos; mientras se me permita hablar aunque sea una vez cada ocho meses; mientras por el poder no se haga enmudecer del todo a mi voz, la oirá aquél, como la voz de una autoridad, limpia de toda mala pasión, pero vigorosa y potente en contra del abuso de la fuerza y a favor de la ley, de sus inmunidades y de los derechos del pueblo.

¿Es todo lo anterior un reproche a usted? No y mil veces no. No me ocupo de personas, ni aun siquiera de la mía, cuando tengo al frente asuntos tan graves. Me ocupo de la defensa de la autoridad. Narro hechos y saco de ellos las consecuencias precisas. He aquí todo.

Además, sé que los hechos consumados y los que en lo sucesivo se consumaren, proceden de un origen más elevado.

Me dirá usted que le he hablado demasiado, sin tocar el punto que se desea saber. Es verdad esto y es también verdad que lo he hecho intencionalmente. Esta es la única oportunidad que se me presenta para hablar y la aprovecho. Así es, que si he intercalado algunos párrafos en

esta carta que parezcan inconducentes al objeto que la motiva, la culpa es de la posición en que se me ha colocado.

En el periódico oficial del estado, que usted ha tenido la bondad de introducir a mi prisión cada vez que se publica, leí un artículo suelto, escrito como al acaso, anunciando la comunicación que, relativa a mi persona, dirige a usted con fecha 16 del pasado el señor general don Ignacio Mejía, con el carácter de ministro de la Guerra. Cuatro o cinco días después leí la citada comunicación en el mismo periódico y por último recibí la transcripción de ella firmada por usted el día 4 del corriente.

Busqué en el fondo una razón grave que la motivara y no encontré ostensiblemente alguna; pero acostumbrado a ver en el fondo y en la forma pública del gobierno de hecho, desde sus decretos de 8 de noviembre, no la verdad que recomienda Fenelón, sino lo que sólo tiene de ella las apariencias y los ropajes, busqué tras las palabras la verdadera intención con que fue escrita y aunque las miras de esa intención no son tan profundas que se oculten a una vulgar penetración, creo sólo conveniente decir a usted respecto de esto: que la verdad no teme la luz, ni teme tampoco las asechanzas. He aquí la razón que he tenido, por lo que respecta a esto, para dirigir a usted esta carta.

Que cometí dos delitos, dice la nota citada, uno común y otro oficial, por haber abandonado como soldado las banderas del ejército y como magistrado la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y que por ambos delitos se declaró que había lugar a proceder contra mí. Esto mismo dicen los decretos de 8 de noviembre de 1865 que apoyaron el golpe de Estado.

No reconocí en aquella época ni reconozco hoy en el gobierno de hecho del señor licenciado don Benito Juárez, título alguno para darle cuenta de mis actos y explicarle mi conducta como legítimo representante que soy de la nación. Entonces me dirigí a ésta directamente por medio de mi manifiesto fechado en San Antonio de Béjar el mes de diciembre de 1865 y por otros documentos que posteriormente di a luz en Nueva York y por ellos demostré la notoria falta de verdad en que se apoyaban aquellos decretos, publicando las

licencias y pasaportes que, acordados en junta de ministros, se me extendieron como magistrado y como soldado, firmados por los secretarios de Justicia y de Guerra y en cuyos documentos se decía: "El ciudadano presidente se ha servido acordar en junta de ministros que se conceda a usted licencia por tiempo indefinido, hasta que vuelva a presentarse en la residencia del gobierno, o hasta que el mismo gobierno llame a usted o le dé alguna comisión".

En uno de los citados decretos se decía también, para extraviar a la nación, que no sólo había estado permaneciendo fuera de la República, pero que ni antes ni entonces me había dirigido al gobierno para manifestarle cuándo pensaba regresar al territorio nacional. Demostré igualmente la falta de verdad de esta aseveración oficial, publicando cartas autógrafas del señor licenciado Juárez, cuyas publicaciones colocaron a este señor en esa situación terrible, que si rebaja el mérito del hombre particular, degrada y envilece a la autoridad.

Decían también los decretos: que había lugar a proceder contra mí; y decía yo entonces y repito ahora en los mismos u otros términos semejantes.

Suponiendo que contra las prácticas y usos establecidos en los pueblos civilizados; suponiendo que contra la legislación particular del país y contra la general de todas las naciones, la individualidad del señor licenciado Juárez se hubiera erigido en gran jurado haciendo de juez y parte y sin oírseme en defensa, sin citárseme siquiera ni como autoridad ni como particular, se hubiere pronunciado ese fallo hollando en mi humilde persona la inviolabilidad de la Constitución, conculcando en ella los derechos del pueblo y los más vulgares principios del derecho natural, como dice en su protesta el señor licenciado Palacios, diputado por el estado de Chihuahua; suponiendo, repito, todo este absurdo jurídico y político, ¿con qué facultades lo ha hecho?

El título IV de la Constitución se la concede única y exclusivamente al Congreso, con la circunstancia de que no puede hacerla, sino erigido en gran jurado y a mayoría absoluta de votos.

En las facultades extraordinarias que el Congreso concedió al gobierno y que a cada momento se citan, callando la parte esencial de

ellas para atropellar con su autoridad la ley, no sólo dejó de concederle tácitamente esa facultad, sino que, al otorgarle aquéllas en la ley de 27 de octubre de 1862, le puso la terminante y expresa restricción: que no podía contrariar las prevenciones del título IV de la Constitución; esto es, que no podía declarar si había o no lugar a proceder contra los altos funcionarios públicos. Restricción que tuvo, sin duda alguna, por único objeto amparar al presidente de la Corte Suprema y evitar que el Presidente de la República abusara del poder y destruyera de una plumada el orden constitucional, como lo hizo al fin, no obstante el dique legal que le pusiera la previsión y el patriotismo de la Cámara de representantes.

Ningunas facultades, pues, tenía el señor licenciado Juárez para declarar que había lugar a proceder contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero era necesario asaltar el poder y destruir la Constitución, y oponiéndose mi persona oficial a la realización de todas estas miras, ha tenido que pasarse sobre los usos, sobre las costumbres, sobre la ley, sobre el derecho de la nación y, por último, sobre la lógica y sobre el sentido común.

He tocado someramente los puntos anteriores, para que no se crea, por mi silencio, que acepto ahora los infundados cargos que se me han hecho otra vez. En cuanto a lo demás, los documentos publicados por los partidarios de la legalidad y por mí, arrojan la luz necesaria, y dan las pruebas suficientes para conocer la invención que se ha hecho de delitos cometidos por mí, para destruir por medio de este ardid la ley. Hechos notorios que han pasado posteriormente y que están pasando ahora, corroboran aquellas pruebas.

Los documentos a que aludo han sido publicados en varios idiomas y son conocidos en varios países, excepto en México, donde se ha impedido su circulación. Si por este hecho tuvieran que valorizarse los adelantos que la nación ha hecho, tendría ésta que renegar de la sangre que ha derramado y de los sacrificios sin cuento que ha hecho para conquistar sus libertades públicas.

Que se me pregunte, dice al final la nota mencionada, si deseo que se me sujete desde ahora a juicio, en cuyo caso se obsequiará mi deseo.

Ya he dicho y repito que ninguna autoridad tiene el señor licenciado Juárez, que ninguna autoridad reconozco ni he reconocido en él, para que se crea con derecho a juzgarme. He cedido a la violencia y a la fuerza, y he protestado contra ellas. Hoy mi persona en su parte física, por decirlo así, está y ha estado sujeta a todos los caprichos de la fuerza y de la arbitrariedad; pero mi persona moral, que representa el poder de la ley y la dignidad de una autoridad constitucional, la he conservado y jamás la humillaré, con el auxilio del cielo, a los atentados de la fuerza bruta, siendo ésta la última prueba que pueda dar a mi patria de la lealtad de mis juramentos a los votos con que ella me honró.

¡Que se me sujete a un juicio!

¿Y por qué se me sujeta a ese juicio? ¿Será porque, consecuente, con mi deber, he defendido la inviolabilidad de la ley, que me encomendó la nación de un modo expreso y solemne, y protestado contra los decretos de 8 de noviembre de 1865, en que se atropella no a mi persona sino a la nación en su ley?

¿Será porque deseando el señor licenciado Juárez perpetuarse en la presidencia y disponer de ella como de una propiedad particular, burla sus juramentos, y rompiendo los artículos 79 y 82 de la Constitución, que le previenen entregarme el mando supremo, declara que soy criminal y, en consecuencia, que él es la ley y que, llegado el caso, nombrará una persona para trasmitirle su herencia?

¿Será porque he levantado mi voz contra ese acto que deshonra a la República, cuando se le dijo al mundo, por medio de él, que la ley en México no es el lábaro inviolable de esa República, en cuyo pie se estrella la anarquía, sino una enseña irrisoria que desprecia y burla la fuerza cuando así cuadra a sus miras?

¿Será porque el señor licenciado don Sebastián Lerdo de Tejada, alma del gobierno de hecho, para asaltar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, cuya autoridad me confiara el voto de los pueblos, amontona calumnias contra el Presidente constitucional de la misma Corte, autoriza el golpe de Estado del Paso del Norte y, con escándalo de la sociedad, llega al punto que se había propuesto, para ostentar el triunfo

de una intriga, con mengua de los derechos políticos del pueblo mexicano?

Estas no son quimeras que brotan de una imaginación irritada, sino hechos tan claros como la luz.

Hasta hoy los revolucionarios y los usurpadores en nuestro país, se han conformado con asaltar el poder y han buscado su justificación y su legalidad en la conveniencia pública, en las necesidades de la época, en el voto de una minoría, o en cualquiera otro pretexto de esta naturaleza, pero hasta hoy nadie la ha buscado en sacar culpable al que legítimamente representa a la nación ni mucho menos en un juicio monstruoso abierto contra él.

Justificar entre nosotros este nuevo elemento revolucionario y ponerlo a disposición de una ambición personal, no sólo es contrario al progreso y a la paz pública, sino altamente inmoral, aun cuando otros pueblos en sus horas de vértigo, de sangre y de extravío lo hayan puesto en manos de una revolución para indicar una gran verdad ante el mundo.

¿Qué fueros quedarían entonces a la verdad y a la justicia? ¿Qué estímulo al patriotismo? ¿Qué aliciente al funcionario y al empleado para sacrificarse, como el soldado, en las aras del deber y al pie de su consigna, si tras ese sacrificio ve triturada su conducta y ennegrecido su proceder, ante un juicio pronunciado por el victorioso usurpador para sacarle culpable?

Se me dirá, y ya se ha dicho también, por una desgracia bien lamentable de la República, aun por ilustres patriotas, que una necesidad hizo que se rompiera la Constitución en El Paso del Norte y que habiendo sancionado esto la nación con su silencio y con el reconocimiento del señor Juárez por la fuerza armada, su gobierno es hoy el gobierno legítimo del país.

Ninguna necesidad había de que el señor licenciado Juárez rompiera la Constitución en El Paso del Norte. La necesidad que había, era que se desprendiera del poder para dar respetabilidad a ese código y honrar a su patria con ese acto de virtud republicana, en cumplimiento de su deber.

La nación nada ha sancionado hasta hoy por los órganos legítimos que tiene establecidos.

El hecho no es el derecho, se ha dicho ya mil veces. Unos cuantos ciudadanos, por grandes que sean, no son la nación.

Pero el señor licenciado Juárez ha declarado que la libertad de México es él, que él es la República, que si él no salva a ésta, ella no puede salvarse y que sus mandatos son superiores a los preceptos de la ley, todo por supuesto en uso de amplias facultades y más que todo por la voluntad del pueblo, cuya soberanía es la ley suprema de las naciones, según lo dice y aplica a su modo el señor licenciado Lerdo de Tejada en una circular inserta en el ya citado periódico.

Oiga usted lo que sobre esto dice, no un encarcelado, cuya voz no debe juzgarse imparcial, sino un autor demócrata que escribe los progresos de la libertad en los Estados Unidos.

"La voluntad nacional es una de las voces de que han abusado más los trapaceros de todos los tiempos y los déspotas de todas las edades. Unos han visto su expresión en los sufragios comprados de algunos agentes del poder; otros en los votos de una minoría interesada o medrosa; y hasta los hay que la han descubierto del todo dictada en el silencio de los pueblos y han pensado que del hecho de la obediencia nacía para ellos el derecho del mando". (Tocqueville, *La Democracia en América*, tomo I).

Añadirá usted que se ha recurrido ya al sufragio popular para subsanar el origen vicioso del poder.

Por los documentos que he leído en el tantas veces citado periódico y muy especialmente por la convocatoria, circular que la explica y artículo 2º de la ley 7 de junio de 1861, no he visto sino que se trata de destruir por completo la Constitución de 1857, de reunir un Congreso, o convención, revolucionario con título o poderes recogidos de un modo inusitado en nuestro derecho constitucional y de que salgan electos: Presidente de la República el señor licenciado don Benito Juárez y presidente de la Suprema Corte de Justicia el señor licenciado don Sebastián Lerdo de Tejada, poniendo para ello una mordaza a la prensa,

para que, en tiempos de elecciones, no trate de desprestigiar a la autoridad.

Con una libertad semejante se recurrió, en tiempo de su alteza serenísima, a recoger el sufragio popular. Ya vimos los frutos que recogió el tirano.

Esta clase de actos deshonran más a la República, que cuanto hayan dicho y digan en su contra los enemigos de ella, aristócratas o monárquicos.

Ningunos títulos, determinados por la ley, tiene el señor licenciado Juárez para convocar al pueblo a la elección de sus funcionarios y autoridades. Ningunas facultades tiene tampoco para acabar de destruir nuestro Código Fundamental, ni siquiera revolucionarias, porque de la lectura de los documentos, de que me ocupo, he deducido que no hay acta alguna por la que una revolución autorice al señor licenciado Juárez a destruir, modificar o alterar aquel código, único elemento político que conserva la nación, para asegurar los derechos del pueblo, salvarse de la anarquía y de nuevas y sangrientas guerras civiles, siendo al mismo tiempo ese código susceptible de cuantas reformas filosóficas quiera hacerle la mayoría de la nación.

Washington decía a sus conciudadanos, lejos ya del poder y antes de su última carta que se ha considerado como su testamento político:

"Si la modificación o distribución de los poderes federales y constitucionales es bajo algún concepto erróneo e inconducente, en opinión del pueblo, corrija-se con una enmienda en la forma que designa la Constitución; pero que no haya cambio por usurpación; porque ésta es el arma con que ordinariamente se destruyen los Gobiernos libres".

Verdad es que el señor licenciado Juárez se apoya en la fuerza; si, pues, con las facultades con que en El Paso del Norte destruyó un principio constitucional, quiere hoy destruir los restos de nuestra Constitución política nada tengo que decir; pero al menos que no se invoque la autoridad de ese código porque éste es el sofisma con que se le mata, no la verdad sincera con que se le obedece.

Callan las leyes ante las armas, decía Cicerón al defender a Milón en tiempo del consulado de Pompeyo. Callan también en México,

podremos decir nosotros después de diez y nueve siglos en que la humanidad ha asegurado su marcha lenta y trabajosa, pero llena de filosófica conquista, y callan en una República de los tiempos modernos y en nombre de la libertad.

Una dolorosa experiencia nos ha testificado que mientras no sea acatada la ley constitucional por el gobernante, mientras los gobernados no obliguen a aquél a cumplir estrictamente, es del todo imposible la República, porque es imposible la paz, porque son imposibles las garantías, porque es imposible la libertad.

He hablado a usted de mis títulos y de mis deberes, dados e impuestos por la nación. Ni aquéllos ni éstos son a usted desconocidos. Para los unos y para los otros ha cooperado la persona del señor licenciado don Manuel Z. Gómez, como diputado al Congreso General. Recuerdo que el digno estado de Nuevo León me honró con su voto y con su confianza para presidente de la Suprema Corte de Justicia, por medio de su Diputación, de la que formaba usted parte. Al otorgarme aquel voto me impuso también la terrible obligación de cumplir el deber que me señalaba la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, que era encargarme del poder en determinado tiempo y defender y salvar aquel código; obligación que me contraje por medio de una solemne protesta hecha ante la representación nacional, presidida entonces, según recuerdo, por el señor licenciado don Sebastián Lerdo de Tejada. Evóquese, pues, un recuerdo, óigase un momento la voz de la conciencia entre los lisonjeros halagos del poder y se verá que mi conducta pasada es la del ciudadano que pretende llenar amargos y penosos deberes y mi conducta presente la del hombre que, con una conciencia tranquila, dice a sus conciudadanos, desde el fondo de una prisión: "Quedaron por mi parte incólumes vuestros derechos, ilesas vuestras leyes".

Duras parecerán a usted algunas frases de esta carta; en otra posición que me encontrara y con otra representación, duras, quizá, también me parecerían. Ellas, sin embargo, no me las arranca ni el temor, ni el odio ni la venganza. Quieto el corazón, sereno el espíritu después de un silencio de ocho meses, oigo que mi conciencia me dice que debo

hablar y que a pesar de las ovaciones rendidas al poder por los triunfos obtenidos por el pueblo y sus caudillos, a los pies de cuyos héroes también arrojo yo himnos sinceros de admiración y gratitud por sólo lo relativo a la salvación de la independencia nacional; a pesar del doloroso extravío de personas a todas luces patriotas; a pesar del mundo todo, mi voz, mientras impere la Constitución de 1857 y no sea según ella sustituido, es la voz majestuosa de la ley aunque no salga brillante de los palacios sino andrajosa de las prisiones, es la voz del legítimo representante de una República, cuya República ve ajada su ley y calumniada su autoridad y no la voz débil del hombre que, vencido físicamente, no puede hacerse escuchar ni aun de ilustres patriotas que se hallan desterrados y que a sus ecos no responde sino la voz de otro hombre que se halla en su prisión.

Una atención puramente personal, a la que usted es acreedor por sus maneras decentes y finas, hace que conserve en mi poder y no le devuelva la nota oficial que me dirigió con la fecha 4 del corriente. Sería una inconsecuencia no reconocer la legitimidad de un poder y entrar con él en relaciones oficiales bajo cualquier carácter que sea. Me dirijo a usted, porque por su conducto hablo a la nación, único juez que reconozco.

Probablemente detendré esta carta hasta hacer salir de mi prisión, por cualquier medio, copias de ella, a fin de que se publiquen cuando y como se pueda, para que no se mutilen, tergiversen o adulteren los conceptos que en ella vierto, como se hizo en Durango en enero último y de una manera poco noble por encontrarme en situación, no sólo de no poder defenderme, pero ni aun de saber lo que de mí se dijera.

Antes de concluir, permítame usted dirigirle una pregunta con mi simple carácter de ciudadano mexicano. ¿Tanto ha cegado el poder al señor licenciado don Benito Juárez, que no ve el precipicio a que está empujando a su patria? Al reunir una asamblea revolucionaria para que haga una nueva Constitución, porque a eso equivalen las bastardas y retrógradas reformas que tratan de hacerle a la de 57, ¿no ve que en realidad es darle dos constituciones a su patria y, en consecuencia, una nueva bandera a los partidos y un nuevo elemento a la guerra civil?

¡Ojalá y aquel señor vuelva de su extravío! ¡Ojalá y México comprenda sus intereses verdaderos y se salve!

En lo personal, tengo el alto honor de rendir a usted mis sinceros respetos y ofrecerme por su inútil servidor.

Jesús González Ortega

Es copia que certifico. La misma fecha.

Jesús González Ortega

SE OFRECE AL GENERAL PATONI
LA LIBERTAD BAJO SU PALABRA

Señor don José M. Patoni
Presente

Con fecha 6 del corriente dice a este gobierno y comandancia militar el ministro de Guerra y Marina, lo que copio:

El ciudadano Presidente de la República se ha servido acordar quede en libertad el ex general don José M. Patoni a fin de que, bajo su palabra de honor, venga a presentarse al Supremo Gobierno.

Dígolo a usted para su conocimiento y fines consiguientes.

Y al transcribirlo a usted, tengo la satisfacción de decirle que queda en completa libertad, con el fin de obsequiar la anterior suprema disposición, comunicada por el ministerio de Guerra.

Protesto a usted las seguridades de mi atención y particular aprecio.

Independencia y Libertad. Monterrey, septiembre 21 de 1867.

Manuel Z. Gómez

PATONI RECHAZA EL OFRECIMIENTO

Monterrey, septiembre 23 de 1867

Señor licenciado don Manuel Z. Gómez
Presente

Muy señor mío:

Ocho meses y medio de prisión no me han hecho cambiar. Opino como opinaba a fines del año de 65; esto es, que el señor Juárez cesó de ser presidente legal de la República desde el día en que por sí y ante sí se dio nueva vida política, infringiendo los artículos 78, 79 y 82 de la Constitución.

Aceptar hoy la libertad que espontáneamente se me ofrece, con la condición de presentarme en México bajo mi palabra de honor, sería una inconsecuencia, sería confesarme culpable, cuando según mi conciencia he cumplido con los deberes de hombre público y de ciudadano independiente.

Si sin condición alguna puedo quedar en libertad, espero tenga usted la bondad de decírmelo.

Sírvase usted aceptar las razones expuestas como un causal, para que haya usado de la forma epistolar al contestarle su nota de anteayer, en que me transcribe la que usted recibió de México, fecha 6 del corriente.

Soy de usted atento servidor.

José M. Patoni

EL GOBERNADOR DE NUEVO LEÓN
COMENTA LAS RESPUESTAS
DE GONZÁLEZ ORTEGA Y PATONI

Monterrey, septiembre 24 de 1867

Señor Presidente don Benito Juárez
México

Mi respetable amigo y señor:

Mando por el correo de hoy al ministerio de la Guerra dos documentos curiosísimos: las contestaciones que en carta particular me han dado los señores González Ortega y Patoni a los oficios que les he dirigido en cumplimiento de órdenes superiores. Dos son las únicas autoridades legítimas que tiene hoy México, el presidente de la Suprema Corte, don Jesús González Ortega y el gobernador de Durango, don José María Patoni. Lo demás es farsa con inclusión del Congreso que se reúna.

Tentación tuve para publicar aquellos documentos; pero son tan duras las expresiones de González Ortega, que temí desagradara ese hecho al gobierno si no iba acompañada la publicación de otra que fuertemente la refutara y consideré que debía dejar esto a la consideración del Supremo Gobierno. Rechacé, sin embargo, los terribles cargos por lo que llama su rígida y hasta brutal prisión, porque a mí me correspondía contestar ese cargo y facilitar al gobierno esos datos si acuerda la impresión de todos los documentos.

Se ha aprehendido ya a uno de los que acompañaban a Quiroga y tengo fundadas esperanzas de que este hombre funesto también caerá.

El general Escobedo se encuentra en Linares, de donde pronto regresará a esta ciudad para volverse, según me dijo, a San Luis (Potosí).

Estoy en espera de la contestación a mis pedidos que me ha ofrecido el señor Iglesias y encarecidamente ruego a usted que no me deje en descubierto y sin saldar compromisos que afectan la reputación del gobierno.

Ya he hablado a usted, señor presidente, del general Treviño, cuya candidatura para gobernador de este estado triunfará. La discordia que ha introducido Garza Melo exige la presencia de ese jefe, ya que los amigos todos han convenido en su postulación y que por esto no tendrá más competidor que el mismo Garza Melo, incapaz de gobernar en paz por el desconcepto y los innumerables enemigos que él mismo se ha procurado con su conducta. Yo no he querido figurar en esa contienda, porque odio la división entre los nuestros y por esto cederé gustosísimo el puesto al general Treviño.

Soy de usted, señor presidente, con el mayor respeto, su muy adicto amigo y atento servidor.

Manuel Z. Gómez

Nota de Juárez:

Enterado. Que ya va para Monterrey el señor Treviño y que por la enfermedad del señor Iglesias no se ha podido resolver el asunto a que se refiere.